

S.C. E.144, L.XXXIV.

Ministerio Público
Procuración General de la Nación

Suprema Corte :

- I -

A fs. 4/12, El Cóndor Empresa de Transportes S.A. promovió demanda contra la Provincia del Chubut, a fin de obtener la declaración de inconstitucionalidad del impuesto sobre los ingresos brutos que le fue liquidado a consecuencia de la actividad de transporte interjurisdiccional que desarrolló desde octubre de 1994 a junio de 1997, por entender que resulta contrario a los arts. 17, 31 y 67, inc. 12, de la Constitución Nacional (texto anterior a la reforma de 1994) y al régimen de coparticipación federal.

Según explicó, es permisionaria de la Secretaría de Transportes del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación para prestar servicios públicos de transporte interjurisdiccional de pasajeros y afines, bajo el régimen de la ley 12.346 y sus modificatorias.

Especificó que las tarifas vigentes durante el *sub lite* fueron fijadas por ese organismo, sin contemplar en su cálculo la incidencia del impuesto sobre los ingresos brutos. En tales condiciones, consideró aplicable la doctrina de Fallos: 308:2153 y solicitó que se declare que ese gravamen local configura un supuesto de doble imposición, reñido con el párrafo segundo del inc. b) del art. 9 de la Ley de Coparticipación Federal, ante la imposibilidad de su traslación, encontrándose la actora sujeta al impuesto a la ganancias (ley 20.628 y sus modificaciones).

- II -

A fs. 155/158, V.E. declaró que la causa corresponde a su competencia originaria.

- III -

A fs. 141/149, la Provincia contestó la demanda y solicitó su rechazo.

En primer lugar, indicó que la actora consintió la resolución de la Dirección General de Rentas que determinó la deuda discutida y se acogió a un plan de facilidades de pago en los términos de la resolución (DGR) 219/92, lo que implica la renuncia a toda acción o recurso interpuesto o a interponer vinculado a ella.

En cuanto al fondo de la cuestión, aseveró que no ha demostrado la imposibilidad de trasladar la gabela provincial ni su incidencia sobre la ganancia, razones que excluyen la aplicación de lo resuelto en Fallos: 308:2153.

Por último, afirmó que es irrelevante la naturaleza indirecta o directa del impuesto sobre los ingresos brutos, pues su superposición con los tributos nacionales coparticipables se encuentra admitida expresamente en el art. 9º, inc. b), cuarto párrafo, de la ley 23.548, el cual lo excluye de la prohibición de analogía sentada en los dos primeros párrafos del mismo precepto.

- IV -

Desde mi óptica, la circunstancia de que la radicación del proceso haya de materializarse ante los estrados del Tribunal (arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional) no importa un pronunciamiento sobre la admisibilidad de la acción intentada, a cuyo efecto es necesario considerar, además, si la demandada cumple con los requisitos que el art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece como condicionantes de la posibilidad de entablar acciones meramente declarativas (Fallos: 304:310 y su cita).

Al respecto, es conocida doctrina de V.E. que, siempre que el asunto no tenga un carácter simplemente consultivo ni importe una indagación meramente especulativa, sino que responda a un caso y busque precaver los efectos de un acto en ciernes, al que se atribuye ilegitimidad y lesión al régimen constitucional federal, la acción declarativa constituye un recaudo apto para

Ministerio Público
Procuración General de la Nación

intentar que se eviten los eventuales perjuicios que se denuncian (Fallos: 318:2374, cons. 5º, entre muchos otros).

Sobre la base de tales criterios, estimo que no se configuran en el *sub lite* los requisitos que habilitan la admisión de la acción meramente declarativa intentada.

Así lo entiendo porque, a partir de su adhesión a un convenio de pago en cuotas en las condiciones fijadas por la resolución (DGR) 219/92 (cfr. fs. 124), expresamente reconoció la deuda que se regulariza y renunció a toda acción o recurso interpuesto o a interponer relacionado con ella (cfr. art. 15, resolución 219/92, fs. 137/140). Ello constituye una circunstancia deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz que no puede pasar desapercibida al momento de juzgar su interés en este pleito (Fallos: 307:1602; 315:1738).

Su postura queda ratificada con la nota de fs. 70, donde manifiesta su conformidad con la deuda determinada en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos desde octubre de 1994 hasta junio de 1997 y desiste de la posibilidad de invocar el art. 43 del Código Fiscal (recurso de reconsideración).

Como sostuvo este Ministerio Público, el Poder Judicial de la Nación, conferido a la Corte Suprema de Justicia y a los tribunales nacionales por los arts. 94, 100 y 101 de la Constitución Nacional (texto anterior a la reforma de 1994), se define -de acuerdo con invariable interpretación- como el que se ejercita en las causas de carácter contencioso a las que se refiere el art. 2º de la ley 27 (Fallos: 312:264, a cuyos fundamentos y conclusiones se remitió V.E.)

En tales condiciones, es evidente para mí que el *sub examine* -ante el reconocimiento de la actora al reclamo provincial- carece de la controversia de derechos, actual y concreta, necesaria para que se configure la “causa” o “caso” contencioso que habilita el ejercicio jurisdiccional, resultando -por el contrario- una mera consulta acerca de una determinada situación o un pedido de declaración general y directa de inconstitucionalidad, cuya procedencia es, entonces, inadmisibile (dictamen de este Ministerio Público *in re* “Droguería Aries S.A. c/ Provincia de Buenos Aires, Fallos: 323:3553, entre otros).

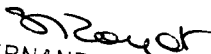
- V -

Por lo expuesto, en mi opinión, corresponde rechazar la demanda

Buenos Aires, 27 de febrero de 2006

ES COPIA

RICARDO O. BAUSSET


FERNANDO ZAYAT
PROSECRETARIO JEFE ADJUNTO
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

6/10/05